

Sr Korte:

En primer lugar quisiera expresarle mi agradecimiento por recibirnos en la sede de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea.

Parece pretencioso que solicitemos colaboración a la propia Unión Europea, pero después de tantos años (desde la modificación de la OCM de frutas y hortalizas) tratando de dar respuesta sin éxito a un problema económico y social en el sector de la naranja del Valle del Guadalquivir, sufriendo numerosas huelgas y necesidades de muchas familia y lo que es peor agravándose cada año; entendemos que es necesario abordarlo conjuntamente desde distintas perspectivas donde la UE puede ser una parte importante de la solución.

Somos conscientes que estamos en una economía de libre mercado, por tanto, como se suele decir, no podemos ponerle puertas al campo, pero para todo hay unos límites y en este caso, nos referimos a la economía sumergida, la competencia desleal, las actuaciones especulativas que favorecen situaciones de oligopolios y lo que es más grave: la explotación de los trabajadores.

El perverso sistema que se ha impuesto mayoritariamente y con tendencia a incrementar es el siguiente:

Un operador de fuera, fundamentalmente de Valencia, sin compromiso con el territorio, compra la naranja a un agricultor no asociado (que representan 60 %) en el árbol o cargadas en el camión. Con el objetivo de maximizar beneficios en la relación agricultor-comprador, le facilita unas cuadrillas de trabajadores mediante ETTs o la figura del manijero. Los trabajadores por cuadrillas están recogiendo la naranja del árbol hasta llenar el camión, este sistema que se ha implantado en toda la comarca no viene recogido en el Convenio del Campo y además se juega con el número de personas que tienen que llenar el camión, cuando se inició hace años se empezó con 24 trabajadores y ahora la media está entre 18 y 16 pero hay casos que se llega hasta 14, esto hace que los horarios de los trabajadores se alarguen penosamente. Como la fruta desde el campo al almacén de procesado tiene que realizar un recorrido de transporte de más de 500Km. el trabajo en el campo tiene que ser perfecto, lo que incrementa aún más la dificultad laboral.

La circunstancia descrita ha originado multitud de protestas y huelgas, por lo que los trabajadores eventuales de la comarca han sido enviados al paro y reemplazados por numerosos trabajadores traídos de otros países de la Unión Europea, que aceptan las condiciones porque, se les contratan gran parte del año, yendo de forma itinerante por las distintas campañas de recolección de frutas y hortalizas de las comarcas del Sur de España y además porque la carestía de la vida de su país de origen es menor. Para enmascarar ésta situación les hacen firmar que cobran según convenio pero en verdad cobran en efectivo una cantidad muy inferior a lo estipulado y en cualquier caso se especula con el número de trabajadores a la baja para la tarea de llenar el camión.

En resumen: se trabaja por tarea incrementada y sin estar incluida en convenio (completar el camión) y se cobra por jornal disminuido, falseado y sin dejar rastro. situación muy injusta pero difícil de comprobar.

¿Qué consecuencias está provocando esta situación de deslealtad y abuso de los trabajadores en el territorio?

En el ámbito económico

- Se están cerrando almacenes de transformación, lo que implica: pérdida de valor añadido, desaparición de la industria agroalimentaria de la naranja, pérdida de numerosos puestos de trabajo en la industria (sobre todo de la mujer), pérdida del capital invertido por los agricultores que apostaron por la comercialización de las OPCs y fracaso de las ayudas públicas destinadas a la creación de infraestructuras industriales.
- Los agricultores están dejando de asociarse, lo que conlleva: disminución de la capacidad de cooperación; se impide la concentración de oferta; pierden posibilidades de comercialización quedando a merced de las grandes operadoras que cada vez monopolizan más el mercado y la competencia se ciñe a un oligopolio de unos pocos que progresivamente presionan más sobre los precios en origen o inventando nuevas prácticas lesivas para los trabajadores; se debilita la posición de los agricultores en la cadena de valor del mercado. Ya hay un 60% de agricultores que no están asociados, por lo que se envían menos naranjas a los almacenes de las OPCs del territorio encareciendo, de esta forma, la amortización de las inversiones al 40% que aún quedan asociados, pero con tendencia a la baja. Este círculo vicioso hará que los agricultores se queden sin estructura que los defiendan en el futuro de los especuladores que se están posicionando en el Valle del Guadalquivir.
- Se pierden oportunidades y fortalezas y se incrementa las amenazas y debilidades para el desarrollo local. Hay que señalar que perder valor añadido significa: disminuir las posibilidades del pequeño comercio y en general todo el sector terciario; se impide la formación de nuevas empresa que trabajen para la industria agroalimentaria; incremento del desempleo; condenar a los pueblos del Valle del Guadalquivir a vivir de un sector primario, lo que hará imposible converger con la media de las regiones europeas convirtiéndose en una carga permanente para Europa; y un largo etcétera de situaciones negativas para el futuro de los jóvenes que se verán obligados a emigrar. La agricultura necesita de la agroindustria para poder ser un sector que permita un desarrollo económico suficiente.

En el ámbito de la sostenibilidad

- Largos e innecesarios desplazamientos, para transportar las naranjas desde las explotaciones agrarias a los centros industriales de transformación (más de 500Km.) y desplazar un amplio número de trabajadores de otros países (más de 3.000Km.), las consecuencias son claras: consumo de combustible fósil que favorece el efecto invernadero e incrementa la huella de carbono; un uso ineficiente y derrochador de las energías; incremento de costes en la cadena de valor que inciden en los precios a los consumidores o en las malas prácticas a los trabajadores en el territorio.

En el ámbito social

- Se manipula la oferta de mano de obra para desproporcionarla con respecto a la demanda, trayéndola desde miles de kilómetros de distancia. Esta situación provoca: desventaja de los trabajadores en el mercado laboral; incumplimiento de los convenios laborales; frecuentemente sin dar de alta en la Seguridad social; hacinamiento de personas en viviendas de escasa calidad; desempleo de los trabajadores locales; problemas sociales; huelgas y conflictos; pobreza y desigualdad; necesidad de incrementar los recursos destinados a los servicios sociales; los trabajadores locales ya empiezan a aceptar

condiciones de incumplimiento de convenios; además de decepción y desconfianza de los trabajadores en los sindicatos, partidos políticos, instituciones públicas y en la construcción de la Unión Europea.

Lo descrito no puede justificarse invocando a la lógica del libre mercado, sino a la falta de honradez de alguno de los actores del sistema, pero lo que resulta más insólito es que se realiza con el conocimiento de las administraciones públicas y más aun, con importantes subvenciones que aprovechan los intermediarios para tejer una estructura en dirección a un monopolio del sector de la naranja en España, que no es lo mismo que la concentración de oferta por los agricultores. Si ponemos nombre a las empresas o empresarios que lideran el sector de la naranja en España, pondremos nombre a quienes conforman el injusto sistema.

Sería necesario repensar los objetivos de las subvenciones públicas y comprobar si verdaderamente se cumplen y si la apuesta de verdad es por conseguir un sector de la naranja competitivo, sostenible e integrador.

Por ello, desde el conjunto del Valle del Guadalquivir proponemos que las ayudas destinadas a la agricultura y al ámbito rural se planteen con un diseño programático que sea coherente para la consecución de los objetivos planteados y con unos mecanismos de control eficientes y sobre todo que ayuden a que se pueda establecer una Estrategia participativa de Desarrollo Rural en el territorio para una economía competitiva, sostenible e integradora. Que mejore los ámbitos económico, ambiental y social.

Para ello, solicitamos:

A la Comisión de Agricultura de la Unión Europea

- Dado que quienes realizan malas prácticas utilizan argucias difíciles de demostrar ante un proceso legal, sería conveniente revertir la carga de la prueba. Por ello es necesario controlar que quienes perciban ayudas públicas, que en realidad sostienen la rentabilidad de las explotaciones agrarias, justifiquen sus gastos e inversiones, de tal forma que se impida o no se permitan ni por activa ni pasiva, el deterioro de los derechos humanos y laborales de los trabajadores y trabajadoras o el incumplimiento de los convenios del campo, para garantizarles una calidad de vida digna.
- Incentivar la cooperación entre los productores para mejorar la competitividad, propiciar la concentración de la oferta, la prestación eficiente de servicios comunes e incrementar su protagonismo en una cadena comercializadora que sea equilibrada y justa con el productor y se pueda blindar ante la entrada de intermediarios innecesarios.
- Colaboración para realizar una decidida apuesta por la agricultura ecológica. Puede ser una forma adecuada de regular la oferta y demanda, limitando la superproducción y sobre todo, obtener alimentos de calidad y saludables para el consumidor europeo.
- Que para garantizar que todos los alimentos que se suministran a los consumidores europeos sean saludables, si realmente creemos en ello, se les exijan la misma trazabilidad a los productos de terceros países, que a los producidos en Europa.
- Colaboración en la promoción de la naranja en la apertura hacia nuevos mercados y especialmente a terceros países.
- No incentivar los sistemas de producción y comercialización que favorecen el calentamiento global y el cambio climático realizando innecesarios transportes de larga distancia en el desplazamiento de sus productos a los centros de procesado y transformación. Al contrario favorecer las explotaciones que realizan transportes cortos, al

objeto de contribuir con la reducción de la huella de carbono y la disminución de los efectos del cambio climático.

- Favorecer la modernización del campo, el uso de las nuevas tecnologías, el ahorro energético, el uso de las energías renovables y el consumo eficiente del agua.
- Promover que el sector de la naranja utilice y rentabilice las instalaciones industriales construidas para generar valor añadido y empleo en el territorio, fortaleciendo la industria agroalimentaria de proximidad.
- Establecer mecanismos de evaluación y de control en los Programas Operativos que sean eficientes para que el gasto en justificaciones sea el menor posible.
- Propiciar un desarrollo local sostenible e integrador, que fije la población en el territorio y que evite los movimientos migratorios y la separación familiar.
- Solicitar colaboración para realizar experimentalmente una acción específica con el sector de la naranja dentro de una Estrategia Participativa de Desarrollo Rural para una Economía Competitiva, Sostenible e Integradora.
- Permitir la coordinación de las diferentes ayudas de la Unión Europea en las estrategias participativas diseñadas en el territorio.

Propuesta para el Gobierno de España

El sector de la naranja en el Valle del Guadalquivir, después de realizar actuaciones de experimentación e investigación se ha conseguido incrementar el periodo de tiempo de la temporada en que se realizan los trabajos de recolección, llegando a ocupar un calendario de trabajo desde mediados de octubre hasta final de junio, con lo cual, abre una serie de opciones relacionadas con el empleo que pueden garantizar cierta estabilidad laboral para los trabajadores y trabajadoras del campo. En ese sentido, se propone:

- Analizar las posibilidades de vincular los recursos actuales destinados a subsidios agrarios a favorecer unas políticas de empleo más estables y beneficiosas para el trabajador y a la par también para la Seguridad Social, y ahorro presupuestario.
- Realizar planes eficaces de inspección en el campo y acciones urgentes contra la economía sumergida y las actuaciones especulativas que se están desarrollando en el sector de la naranja.
- Analizar el Programa de Fomento de Empleo Agrario para enfocar sus objetivos en esta línea de generación de empleo, adaptarlo a las oportunidades laborales agrarias de cada una de las comarcas donde se realizan. Priorizar las personas desempleadas en los procesos de selección, también repensar la idoneidad de seguir exigiendo un número de peonadas para obtener el derecho a subsidio agrario.
- Establecer criterios homogéneos de inspección sobre la afiliación a la Seguridad Social en todas las provincias españolas. Permitir que las labores básicas en la agroindustria relacionadas con el simple manipulado de los productos agrarios, concebirlas como una mera continuación de la actividad agraria, por tanto, las personas que trabajen en dicha actividad puedan ser contratadas en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.

A la Comunidad Autónoma: Junta de Andalucía

Agricultura

- Desarrollar una estrategia para fortalecer la agroindustria andaluza, generadora de empleo y valor añadido. Evolucionar de una agricultura de la superproducción que genera

excedentes y bajos precios, y que se enmarca en una economía en la que predomina el sector primario. A otra agricultura productora de calidad y alimentos sanos, que incremente la cadena de valor y el desarrollo de la industria agroalimentaria.

- Mejorar la competitividad del sector de la naranja.
- Estudiar la reducción de los costes del transporte y mejorar las posibilidades logísticas a centro Europa dado que tenemos en Andalucía una localización más alejada que otras regiones que son la competencia.
- Investigar y experimentar nuevas variedades y sobre todo el comportamiento en la zona de variedades tardías, técnicas de cultivos, reutilizar los subproductos para una nueva industria y otras actuaciones que incremente la competitividad del sector. Establecer grupos operativos de investigación e innovación.
- Ayudas a la contratación de los seguros agrarios en función a la pertenencia a las organizaciones de productores.
- Facilitar a empresas comercializadoras de Andalucía el acceso a variedades club.
- Incentivar a las empresas agrícolas en proporción a que vayan progresando en un itinerario de generación de valor añadido.
- Realizar campañas promocionales, sondear nuevos mercados y mejorar la comercialización del sector.
- Apostar por la Marca de Calidad: Valle del Guadalquivir y una Indicación Geográfica Protegida.
- Colaboración en la fiscalización de las buenas prácticas laborales mediante el cruce de datos y coordinación con otras administraciones.
- Zumo de excelencia y denominación de origen.
- Investigación en productos elaborados a partir de la naranja.
- Apuesta por la agricultura ecológica.
- Mejorar la formación de todos los recursos humanos del sector.
- Apoyo a los proyectos desarrollados en el Valle del Guadalquivir de la agricultura.

Empleo

- Realización de políticas activas de empleo
- Programa de inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo

A diferencia de otras zonas de desarrollo agrícola andaluzas, como Almería y Huelva, donde se empezaba desde cero y no existían jornaleros, aquí en el Valle del Guadalquivir ya se contaba con una tradición agrícola importante en el sector hortofrutícola y concretamente en el cultivo y recolección de la naranja.

Pero a pesar de que existe tal tradición en la forma de hacer agricultura, se hace necesario innovar, además de poner en marcha una acción política y de empleo específica para estos jornaleros, de modo que puedan tener calidad de vida y así lograr asentar a la población en el territorio.

A los Ayuntamientos del Valle del Guadalquivir

- Diseñar una Estrategia Participativa de Desarrollo para el Valle del Guadalquivir para una Economía Competitiva Sostenible e Integradora.

